

Otto Pérez: entre Baldizón y la calle

Análisis de Coyuntura



Ilustración Víctor Matamoros > El periódico

IPN-USAC

Instituto de Problemas Nacionales / Universidad de San Carlos

La crisis política que estalló el 16 de abril ha seguido un curso inédito, hasta situar esta semana al presidente Otto Pérez a un paso de su salida. Inesperadamente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno decidió el pasado miércoles 10 dar trámite a una querrela de antejuicio, que trasladó al Congreso. El mandatario ha reafirmado que no renunciará al cargo, pero es obvio que de la soledad ha caído al vacío político, como previó el *Análisis* del IPNUSAC (*elPeriódico*, 31/05/15).

Desde el 25 de abril, cuando se celebró la primera marcha masiva en la capital y en varias ciudades de la República, la ciudadanía exigió en primer plano la renuncia de Roxana Baldetti por su presunta implicación en una red mafiosa en las aduanas, desveladas por la CICIG y el MP. Su dimisión ocurrió el 8 de mayo, pero la demanda en las calles y las redes

sociales no se contuvo. Se desplazó con fuerza hacia Pérez, como responsable político del Gobierno. El CACIF no alcanzó consenso sobre la renuncia del Presidente. En un comunicado del 28 de mayo le demandaron “restituir los bienes sustraídos al Estado”, subrayando que la “institucionalidad del país no está vinculada a la permanencia en su cargo de quien ejerce las funciones de la Presidencia de la República”.

La exigencia de renuncia se puso cuesta arriba cuando el 2 de junio el embajador de los EE. UU., Todd Robinson, apoyó la permanencia del mandatario, desde el propio podio Presidencial. Esa posición fue blanco de críticas de intelectuales de diversas corrientes y objeto de ironía en las redes sociales. Pero fue una bocanada de oxígeno para Pérez, sus cercanos y los diputados, es decir, la clase política cuestionada. Así, tomó ímpetu la idea de atender las demandas ciudadanas a través de mesas de discusión convocadas por el Congreso de la República.

La presentación oficial ocurrió el 3 de junio, y el presidente del Legislativo, Luis Rabbé (ahora candidato a la reelección por el partido Lider) explicó que las mesas tratarían la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Contrataciones, la Ley de Servicio Civil y el campo de seguridad y justicia. La iniciativa fue atendida por una parte de la sociedad, pero sospechando que encerraban intenciones dilatorias.

Dos días más tarde, el viernes 5, desde media mañana la ciudad de Guatemala fue literalmente sabotada mediante la interrupción total de las principales vías de acceso y en circuitos interiores. Las organizaciones campesinas y sindicales conocidas se deslindaron inmediatamente del operativo y, por la manifiesta tolerancia de las fuerzas de seguridad hacia los manifestantes, las miradas se volvieron hacia el Gobierno, en particular sobre el ascendente hombre fuerte en seguridad del mandatario, el general retirado Ricardo Bustamante, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y con autoridad sobre los ministerios sociales, como Desarrollo y Cultura y Deportes, cuya capacidad de clientelismo ha sido repetidamente denunciada en los medios.

Bustamante ganó espacios tras la renuncia del ministro de Gobernación, Mauricio López, también exmilitar, pero su contrario político en el entorno del Presidente. La exigencia de esos manifestantes del viernes 5 era que la CICIG investigara, por supuesta implicación en la defraudación tributaria en las aduanas, a cuatro empresarios de distintas corrientes: Diego Pulido, directivo del Banco Industrial, propiedad de las poderosas familias tradicionales; Jorge Briz, presidente de CACIF y crítico abierto de Pérez Molina; Dionisio Gutiérrez, copresidente de la corporación Multi Inversiones, antiguo aliado del gobernante pero quien días antes le había pedido la renuncia a través de un video que circuló en las redes sociales, y Gustavo Alejos, empresario farmacéutico, aliado del mandatario durante su primer año de gestión y ahora financista de Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE.

Así, la permanencia del presidente Pérez comenzó a generar reacciones oficiales de diversa naturaleza que no contribuyó a la estabilidad. Cuando los sindicatos públicos dirigidos por Joviel Acevedo (magisterio) y Luis Lara (salud) salieron a la palestra, otras alarmas se encendieron. La decisión de la CSJ, que era contraria a la de un mes antes, cuando querellaron contra Baldetti y contra Pérez, comenzó a ganar adeptos entre los magistrados.

Parecía imposible, dado que esa Corte se integró apenas el 25 de septiembre de 2014, bajo polémica y enormes críticas (incluyendo señalamientos por violar la Constitución al irrespetar los plazos de relevo), por un pacto entre los operadores del Gobierno, el presidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, y Salvador Baldizón, hermano del candidato presidencial del partido Lider, con la intermediación de Alejandro Sinibaldi, ex pre candidato del PP.

Pero ya se había visto con Baldetti que la CSJ no era enteramente leal al Gobierno, pero al tramitar ahora el antejuicio del Presidente significa que los reflectores se sitúan sobre Manuel Baldizón y su partido en el Congreso. Es un mal escenario para Baldizón: no le conviene la salida del Presidente, pero no puede ser responsable de que siga. Más aún: cuando la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, que convocó la Usac, propone recalendarizar las elecciones, dentro del periodo de la Constitución, a fin de que algo se corrija en el esquema y se dé paso a nuevos actores de la sociedad. Reprogramar las elecciones resulta, indirectamente, un golpe a Baldizón y sus aliados, cuando el voto de rechazo a su candidatura se eleva en los centros urbanos, sin los cuales podría ganar pero no gobernar.

El viernes 12, Washington giró el mensaje: no defendemos personas (Presidentes), sino sistemas (democráticos y transparentes).